



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., veinte de abril de dos mil veintitrés.

Radicación n°.	05001 31 03 013 2020 00208 01
Proceso.	Ejecutivo
Demandante.	Bancolombia S.A.
Demandada.	Comercializadora de Cueros Pérez Bran S.A.S. y otro
Procedencia.	Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma auto que decretó pruebas
Tema.	Requisitos objetivos de las pruebas
Rdo. interno.	089-22
Interlocutorio No.	080-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede la Sala a resolver la apelación formulada por el apoderado de la sociedad demandada, en contra del auto del 11 de agosto de 2022, en lo atinente a le negativa del decreto de la prueba solicitada por la misma, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Formuló Bancolombia S.A. demanda ejecutiva en contra de la Comercializadora de Cueros Pérez Bran S.A.S., y Luis Fernando Peña Ramírez, para el recaudo de las obligaciones que afirma le adeudan éstos, vertidas en varios pagarés, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, el cual, mediante auto del 10 de octubre de 2020, libró mandamiento ejecutivo (Archivo 05).

Vinculados los demandados al referido asunto, el vocero judicial de la sociedad demandada, propuso como excepciones (Archivo 29):

1.1. *“Inexistencia del Negocio Causal”*. En razón de que no se había señalado en ninguno de los documentos de la apertura del crédito rotativo, el valor del crédito, lo cual era una solemnidad a la luz de lo establecido en el artículo 1402 de Código de Comercio.

1.2. *“Falta de requisitos Formales del Título Ejecutivo”*. Por adolecer los pagarés que fundamentan la acción del requisito formal de la indicación de la forma de vencimiento, pues si bien éstos contenían una fecha en la cual debía realizarse el respectivo pago de la obligación cambiaria, no se indica la forma de vencimiento, a las que se refería el artículo 673 del Código de Comercio (aplicable a los pagarés por remisión normativa del artículo 711).

Y como pruebas, pidió que se solicitara a la parte accionante, que allegara todo el historial crediticio, relacionado con los pagarés objeto de recaudo; indicándose, además, la forma en la que habían sido diligenciados cada uno de estos títulos y el manejo de los intereses generados hasta el momento de la contestación de la demanda.

Así las cosas, una vez notificadas las demandadas y siendo el momento procesal oportuno, se convocó a audiencia para la evacuación de las etapas contempladas en los artículos los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, mediante auto del 11 de octubre de 2022, por lo que en esta misma providencia se decretaron las pruebas que se estimaron procedentes.

2.- El auto apelado. En la referida providencia, se denegó por la a quo la prueba concerniente a que se requiriera a la demandante para que indicara *“la forma en la que fueron diligenciados cada uno de los pagarés objeto del presente conflicto...”*, al estimarse que la misma carecía de utilidad, toda vez que para tal fin se tenía la carta de instrucciones para cada instrumento cambiario (Archivo 44).

3.- La apelación. Oportunamente el apoderado de la persona jurídica demandada, interpuso recurso de reposición y en subsidio, el de apelación, frente a la negativa del decreto de la prueba. En esa medida, estimó que la utilidad del medio de prueba denegado podía evidenciarse en que, si bien constaban las

instrucciones para el lleno de los espacios vacíos de los títulos valores adunados a la demanda, dichos instrumentos no eran los pertinentes para demostrar si se acataron dichas instrucciones, pues en éstas no existía una declaración o medio de control para la verificación respecto del acatamiento de las instrucciones.

Es así que, indicó, este informe o declaración era útil para determinar si las instrucciones habían sido respetadas y, en consecuencia, establecer la ejecutabilidad de los títulos arrimados a la demanda, conforme con lo contemplado en el inciso segundo del artículo 622 del Código de Comercio Colombiano.

CONSIDERACIONES

1.-Prueba judicial. La prueba judicial es el acto procesal que tiene como finalidad arribar al operador jurídico al convencimiento de los hechos objeto de controversia. En línea de principio, corresponde a los contendientes acreditar los hechos o excepciones que aduzcan, según el papel que desenvuelvan, en aras de lograr la prosperidad de sus súplicas.

Nuestra normativa procedimental civil establece ciertas exigencias que deben satisfacerse al momento de solicitar y practicar el medio probatorio, a efectos de que el funcionario pueda no solo decretarla sino también apreciarla al tiempo de su valoración. Tales exigencias son clasificadas por el doctrinante Azula Camacho¹ en: “Requisitos *Subjetivos*”, que se refieren a los sujetos y tienen en cuenta fundamentalmente dos aspectos “*LA COMPETENCIA Y LA LEGITIMACIÓN*”, la primera atañe al funcionario y la segunda a las partes; “*REQUISITOS OBJETIVOS*” se refieren a la materia u objeto del proceso y están constituidos por “*la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal*” y “*REQUISITOS DE ACTIVIDAD*”, que se refiere a las circunstancias de “*lugar, tiempo y modo*”.

En lo que respecta a los requisitos objetivos, tenemos que:

“A) Conducencia. Hace referencia a que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho... Así, por ejemplo, la compraventa de inmuebles es un acto solemne que debe constar por escritura pública, por lo cual la prueba conducente para demostrarlo es esta clase de documento.”

¹ En su obra “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO”. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1998. Pág. 51 y ss.

“B) Pertinencia. Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis... consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que configuran controversia.”

“C) Utilidad. La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de la controversia que aún no se encuentre demostrado.”

“D) Ausencia de prohibición legal. La prueba puede ser conducente pertinente y útil y, sin embargo, no es dable decretarla y practicarla por prohibirla la ley...”

Es en el auto de apertura del período probatorio donde el operador debe examinar si las pruebas solicitadas por las partes en los actos procesales previos, resultan idóneas para acreditar los supuestos objeto de controversia, debiendo rechazar *in limine* las que no, como expresamente refiere el canon 168 del Código General del Proceso:

“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”

Nótese que, tratándose de pruebas impertinentes o superfluas, esto es, aquellas que tienden a demostrar hechos que no guardan relación con el tema de controversia, o que aun teniéndola ya se encuentren acreditados, su impertinencia o inutilidad debe ser *“notoria o manifiesta”*, es decir, palpable u ostensible, pues de lo contrario lo procedente es que el juez disponga su práctica dada la posibilidad de que contribuyan al esclarecimiento de los supuestos debatidos.

2.- Caso concreto. En el *sub lite*, la *a quo* desestimó la solicitud de la parte demandante, tendiente a exigir a la demandante a que informara la manera como se habían diligenciado los espacios vacíos de los títulos valores arrimados como base de recaudo, por estimar que, contrario con lo señalado por la *a quo*, ésta resulta útil al proceso para establecer si en el diligenciamiento de éstos fueron acatadas las instrucciones y, por ende, si resultan o no ejecutables.

Así, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la prueba peticionada por la parte demandada, cumple con el requisito de utilidad, requisito general que debe revestir a toda prueba, esto es, si la misma sirve para acreditar un hecho materia de controversia en el presente asunto, que aún no haya sido demostrado en el proceso.

Al respecto, aduce el recurrente que con dicha prueba se pretende acreditar si efectivamente los pagarés que contienen las obligaciones que se pretenden recaudar fueron diligenciados por la acreedora en estricto acatamiento a las instrucciones otorgadas con dicha finalidad, pues de lo contrario, no podrían ser ejecutados.

Sin embargo, debe precisarse que si lo pretendido estrictamente por la parte resistente, es verificar si lo anotado, diligenciado o completado en los espacios dejados en blanco en el título valor para el momento de su suscripción por el deudor, se corresponde a la instrucción dada por ésta para tal efecto, basta, como lo señaló la a quo, realizar un comparativo de la instrucción dada con dicha finalidad, contenida en el documento arrimado con la demanda, y el pagaré respectivo, para efectos de establecer si cada uno de los espacios vacíos de éste, fue llenado como se indicó en aquélla; y por tanto, reposando ya en el expediente las respectivas instrucciones y los pagarés para los cuales se otorgaron, el informe peticionado como prueba resulta inútil, como lo señaló la juez de primer grado.

Ahora, si lo que se busca es establecer si la información con la que fueron diligenciados dichos espacios se corresponde con la realidad de la obligación, en cuanto a la cuantía, que sea el valor realmente adeudado por el deudor; la fecha de vencimiento, que corresponda al momento en que se generó el incumplimiento; la tasa de interés, que efectivamente sea la más alta permitida legalmente; entre otros, no sería esta la prueba idónea para tal efecto, sino el historial del crédito, o los movimientos de éstos, con relación al monto y la mora; y para la tasa, certificación expedida por la Superintendencia Financiera en este sentido, que es hecho notorio.

No obstante, la inutilidad de la prueba negada realmente se deriva en el caso concreto, en que con la misma no se pretende probar ninguno de los hechos aducidos por la parte demandada como soporte de las excepciones propuestas, pues solo fueron alegadas la *“inexistencia del negocio causal”* y la *“falta de requisitos formales de los títulos valores”*, sin que ninguna de ellas se cimentara en la desatención o abuso de las instrucciones para el diligenciamiento de los pagarés que se pretenden recaudar; pues la primera, se fundamentó en la falta de indicación del monto de la obligación en los documentos referentes a la apertura del crédito; y la segunda, en la omisión de indicación en los pagarés de la **forma de vencimiento**.

Por tanto, no habiéndose aducido el hecho que se pretende demostrar con el “*informe o declaración*” sobre la forma como fueron llenados los espacios en blanco, esto es, si fueron acatadas las instrucciones dadas para tal efecto, la prueba se deriva en inútil y, por tanto, el rechazo *in limine* de la misma, era procedente, por ser éste uno de los requisitos objetivos que se exigen para ser decretadas.

Bajo estos parámetros, conforme lo esbozado con antelación, se confirmará la decisión apelada, sin costas porque no se causaron.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** la decisión contenida en el auto del 11 de octubre de 2022, proferido por el JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro de la ejecución instaurada por Bancolombia S.A. en contra de Comercializadora de Cueros Pérez Bran S.A.S. y Luis Fernando Peña Ramírez, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022